



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Rey Martínez, Consejero y  
Ponente

Sr. Velasco Rodríguez, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Medina del Campo (Valladolid) el día 31 de mayo de 2012, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de ssss y de D. xxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## DICTAMEN

### I

#### ANTECEDENTES DE HECHO

El día 8 de mayo de 2012 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. yyyy, en nombre y representación de ssss y de D. xxxx, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 9 de mayo de 2012, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 295/2012, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, vigente en el momento de la admisión. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Rey Martínez.

**Primero.-** El 10 de febrero de 2012 D. yyyy, en nombre y representación de ssss y de D. xxxx, presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Diputación Provincial de xxxx1, debido a los



daños sufridos en el vehículo matrícula vvvv, en un accidente acaecido el 19 de junio de 2011 en el punto kilométrico 8,100 de la carretera xx, al colisionar con un corzo que irrumpió en la calzada. Reclama una indemnización de 2.068,64 euros por los gastos de reparación (450,00 euros abonados por el propietario del vehículo y 1.618,64 euros pagados por la aseguradora).

Considera que la Diputación Provincial es responsable de los daños como titular de la vía en la que ocurrió el siniestro, ya que el tramo de carretera en el que se produjo el siniestro está deficientemente conservado y señalizado y no se ha adoptado medida alguna para evitar la irrupción de animales en la calzada.

Se acompaña a la reclamación copias de los apoderamientos otorgados al representante, del permiso de circulación del vehículo, del atestado elaborado por la Guardia Civil, de un informe-valoración de daños y de las facturas de reparación. Se adjunta asimismo un escrito firmado por D. xxxx en el que manifiesta que la entidad aseguradora reclamante le ha abonado la cantidad de 1.618,64 euros.

**Segundo.-** El 7 de marzo el ingeniero jefe del Servicio de Vías Provinciales emite un informe en el que señala que los terrenos colindantes a la zona del siniestro pertenecen a un coto privado de caza; que los arcenes y las cunetas próximos al lugar del accidente (punto kilométrico 8,100 de la carretera xx) estaban limpias y en perfectas condiciones; que tal punto kilométrico estaba afectado por la señal P-24 (peligro por paso de animales en libertad), que contaba con cajetín con la indicación "3.000 m.", ubicada en el punto kilométrico 6,360 (el vehículo iba en sentido ascendente); y que en el punto kilométrico 7,550 (en el sentido de circulación del vehículo) existía un cartel reflectante de grandes dimensiones en el que se advertía de la necesidad de moderar la velocidad por la posible irrupción de animales incontrolados en la calzada. Añade que en determinados tramos de las carreteras provinciales con mayor siniestralidad según la Guardia Civil (entre las que se encontraba la xx, entre los puntos kilométricos 1,500 a 4,000) se colocaron en abril de 2003 barreras de olor para tratar de minimizar la siniestralidad por irrupción de animales, con resultados poco satisfactorios.

Se acompaña al informe una relación de la totalidad de los siniestros ocurridos en la carretera xx desde el 6 de julio de 2005 hasta el 26 de enero de



2012 (39 siniestros en seis años y medio, de los cuales 5 se produjeron entre los kilómetros 5,000 y 10,000 y por el atropello de animales), así como un reportaje fotográfico de la vía.

**Tercero.-** Concedido el trámite de audiencia no consta la presentación de alegaciones o documentación alguna.

**Cuarto.-** El 25 de abril de 2012 se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación planteada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla A), apartado h) del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

**2ª.-** El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Ha de ponerse de manifiesto la extraordinaria diligencia y celeridad con la que la Diputación Provincial ha tramitado el procedimiento y el cumplimiento así de modo eficaz de los principios y criterios que han de regir su actuación, recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros.



Tan sólo debe recordarse la obligación que tiene la Administración consultante de remitir el índice numerado de documentos que conforman el expediente, tal y como exige el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo.

**3ª.-** Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La competencia para resolver la reclamación corresponde al Presidente de la Diputación Provincial, sin perjuicio de la delegación de competencias que pueda existir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 34.1.o), 34.2 y 35.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

La reclamación se ha formulado en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya que se interpuso el 10 de febrero de 2012 y el siniestro tuvo lugar el 19 de junio de 2011.

**4ª.-** El artículo 106.2 de la Constitución establece que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que se remite, de forma genérica, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la reiterada doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.



c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

**5ª.-** En cuanto al fondo de la cuestión, el análisis de las circunstancias que concurren en el caso objeto de dictamen permite apreciar la inexistencia de responsabilidad patrimonial de la Administración Provincial.

Ha quedado acreditado que los daños que fundamentan la reclamación se produjeron al colisionar el vehículo con un corzo que irrumpió en la carretera provincial xx, a la altura del punto kilométrico 8,100.

El corzo tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León, vigente en la fecha del siniestro (este decreto ha sido derogado por el Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre). Además, se considera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las



especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente”.

La normativa vigente es la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha disposición adicional establece lo siguiente:

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

»Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

»También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización.”

No consta en el informe de la Guardia Civil, ni ha sido probado por la Administración, que se haya producido infracción de las normas de circulación por parte del conductor. Descartada la responsabilidad de éste, y al ser el terreno colindante un coto privado de caza, debe analizarse el estado de conservación y la señalización de la carretera para determinar si existe o no responsabilidad de la Diputación Provincial, conforme a la disposición adicional novena antes citada.

La Administración está obligada a la conservación y mantenimiento de las carreteras de las que sea titular y a realizar las actuaciones precisas para la defensa de la vía y su mejor uso, entre las que se incluyen las referentes a la señalización (artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; artículo 48, apartados 1 y 2, del Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre; y artículo 19.1 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León). Asimismo, el artículo 57 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y



Seguridad Vial, antes citada, atribuye al titular de la vía “la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa”.

En el presente caso, el Servicio de Vías Provinciales afirma que la vía se encontraba en buen estado de conservación y que el arcén y las cunetas se hallaban libres de vegetación. Las fotografías adjuntadas al informe permiten apreciar la escasa vegetación existente en la cuneta en el lugar del accidente, de lo que se infiere su buen estado de conservación.

También ha quedado acreditado que la vía estaba correctamente señalizada. El informe técnico constata que la señalización de peligro P-24 era adecuada y afectaba al lugar del accidente, ya que el vehículo la había sobrepasado en 1.740 metros y el tramo de afectación de la señal era de 3.000 metros.

Por otra parte, el informe técnico incide en la especial diligencia de la Diputación para tratar de prevenir este tipo de accidentes. Así afirma que, con la finalidad de reducir la siniestralidad por irrupción de animales en la calzada, en abril de 2003 se colocaron en determinados tramos de tres carreteras provinciales (en concreto en la xx, entre los puntos kilométricos 1,500 y 4,000 – tramo cercano al lugar del siniestro-) 22 barreras de olor “consistente cada barrera de olor en tramo de carretera de 500,00 ml (sic) de longitud, donde se colocan estacas en ambas márgenes, separadas 10 metros con bolas o pelotas de espuma de poliuretano con concentrado de olor de animal silvestre”. Dicho concentrado se revisó a los seis meses y se renovaron los que estaban deteriorados, con resultados poco satisfactorios, “pues el número de accidentes en los tramos donde se colocaron continuó siendo similar el número de siniestro por animales silvestres, cuando no superior”.

Además, debe tenerse en cuenta que, al tratarse de una carretera convencional, no existe la obligación legal de instalar vallas en los laterales de la carretera ni se exige ningún otro tipo de diligencia adicional para la seguridad vial.



Puede considerarse, pues, que la Administración Provincial cumplió con sus obligaciones de conservación y señalización de la vía, por lo que la reclamación debe desestimarse.

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. yyyy, en nombre y representación de ssss y de D. xxxx, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.